

# EL CAGUÁN IRREPETIBLE

Camilo González Posso<sup>1</sup>

En el Hotel donde se realizaba el Congreso Internacional convocado por la Federación de Educadores de México por allá en el año 1997 me encontré con Marcos Calarcá que hacia el papel de Cónsul de las FARC como parte del equipo de Raúl Reyes. “Es cuestión de tiempo, pero ya entramos en la recta final hacia el poder. Estamos derrotando al ejercito en el sur y con otros golpes como el de Patascoy se verá un efecto dominó imparable”, me dijo con una convicción que solo volví a palpar en El Caguán en palabras de Ivan Ríos, Lozada o Paris.

Me atreví a ponerle peros al optimismo de Calarcá. “No se puede negar que las FARC le han dado golpes demoledores a batallones del Ejército y a Cuarteles de la Policía, le dije, ni que están desarrollando estrategias cercanas a la guerra de movimientos con grandes confluencias de frentes, pero de allí a decir que se acerca el desenlace de la guerra hay mucho trecho”.

Acababa de presentarse el Mandato por la Paz y millones de personas se habían pronunciado contra la guerra y por la paz pidiendo con la papeleta de voto “no más atrocidad” y resolver pacíficamente el conflicto. Parecía evidente que se estaba acumulando una energía social sin precedentes en contra de la guerra y “toda violencia” en las luchas políticas o sociales y eso llevaba a pensar que la posibilidad de un triunfo guerrillero como el de Nicaragua en 1979 en lugar de acercarse se volvía imposible. Además, con todas las limitaciones que se pudieran anotar, la Asamblea Constituyente de 1991 significó una apertura en relación al régimen de Estado de Sitio que había regido por más de treinta años y se abrían algunas posibilidades de juego político con la descentralización, los nuevos controles, la carta de derechos y algunos cambios en el sistema político y de partidos.

Como esas consideraciones no movían un milímetro los razonamientos de Calarcá saqué la carta mayor y le dije que la población urbana mayoritariamente estaba tomando distancia de la violencia armada y de los llamados a la guerra del pueblo, de modo que la incidencia de las FARC en las grandes ciudades no pasaría de ser marginal. “Se equivoca, me dijo. El régimen se está derritiendo en medio de sus contradicciones. Samper no puede gobernar y los narcos se han tomado buena parte del Estado. Nadie da un peso por el Congreso o el sistema corrupto. La crisis económica se descarga en la gente pobre. Así que cuando nuestros ejércitos se acerquen a las ciudades se verá dónde están realmente las mayorías. Ahora puede haber confusión y muchas ilusiones producidas por las campañas mediáticas, pero cuando sea imposible disimular el retroceso y desmoronamiento dentro de las fuerzas armadas, otro será el cantar”.

Opiniones de ese corte y argumentos más combativos escuchamos en las charlas informales con los voceros de las FARC –EP en las audiencias públicas realizadas en El Caguán cuando se dieron espacios de participación en medio de las conversaciones entre los negociadores nombrados por el

---

<sup>1</sup> Ex Ministro de Estado, negociador de los acuerdos para la Asamblea Constituyente de 1991, Secretario Técnico del Mandato por la Paz (1997 – 2002) y de las Mesas Ciudadanas para la agenda de negociación (1999 - 2002). Actualmente Presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ.

gobierno y los de la guerrilla. “La escalada de la guerra será inevitable” nos decían. “En realidad no quieren negociar la agenda por Colombia que se pactó en La Machaca, le escuchamos a Iván Ríos y a París, y aquí nos va a tocar entendernos con los ejércitos gringos. En el aire parecen invencibles como se mostraron en la Guerra del Golfo, pero tarde o temprano tendrán que bajar y meterse al monte y aquí es donde se verá la verdad y sus derrotas”.

Durante esos años de Mandato por la Paz y conversaciones en El Caguán no solo pudimos seguirle el ritmo a las FARC sino también al gobierno y a su grupo de negociadores con quienes nos reunimos varias veces en grupo o por separado para intercambiar ideas sobre el proceso y entregarles los aportes continuos de las “Mesas Ciudadanas por la Paz” que funcionaron paralelamente a la Mesa de Diálogo y Negociación entre el gobierno y las FARC y a las rondas de diálogo con el ELN. Regresando de San Vicente del Caguán en un avión contratado por la Presidencia de la República, escuché las cavilaciones más íntimas de esos negociadores que después de un año de ir y venir no veían avance alguno en la agenda.

Todos estos personajes eran de alta densidad no solo porque representaban sectores importantes del *establecimiento* sino por su trayectoria de políticos experimentados o por ser gente cercana a los *cacaos* de la economía. Todos eran escépticos sobre el futuro de esas conversaciones y los más locuaces como Luis Guillermo Giraldo se atrevían a decir que como pintaban las cosas el trajín en realidad serviría para ganar tiempo y volver a la mesa después de ablandarlos militarmente. Alfonso López Caballero, mucho más parco y cauteloso que Giraldo o Gabriel Uribe, asentía probablemente recordando el consejo repetido por su padre con sentencia conocida “hay que derrotarlos primero y luego sentarse a negociar”. Esa recomendación sonaba en todo caso extemporánea o se traducía en otra: “hablar sin negociar y pararse a tiempo para luego de derrotarlos volver a dialogar con los que quedan”.

Hoy, diez años después, me piden que escriba un comentario sobre ese intento fallido de negociación y sobre las lecciones que puede haber dejado para otro futuro y lo primero que se me viene a la memoria son hechos como estos que permiten decir que esa mesa fracasó no porque desde el principio los jugadores titulares entraron con las cartas marcadas, lo que era evidente, sino porque no se generaron las condiciones para cambiar la ruta en el camino.

Sobre esas dificultades hablamos en su momento entre todas las organizaciones y personas que continuamos el movimiento del Mandato por la Paz y que promovimos las grandes movilizaciones de 1998 y 1999 exigiendo que se sentaran a la mesa a dialogar y que se parara la guerra y la atrocidad con ceses de hostilidades y aplicación irrestricta de las normas del derecho internacional humanitario.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Como integrante de la coordinación del Mandato por la Paz en 1997, fui designado por la junta para continuar la tarea de seguimiento y Secretaría Técnica y desde esa función, con el apoyo de centenares de organizaciones en todo el país colaboré con las Mesas Ciudadanas que intervinieron tanto en las conversaciones en el Caguán como en las realizadas con el ELN entre 1998 y 2002.

La pregunta que nos hicimos no desconocía las dificultades ¿Es posible transformar un proceso de diálogo en medio de un conflicto armado interno en un proceso de paz cuando las partes y los negociadores van a la mesa de negociaciones a buscar posiciones políticas o militares para sus estrategias de guerra?

Entre los miles de promotores del movimiento ciudadano seguramente teníamos más ilusiones y lecturas ingenuas que interrogantes frente a la complejidad, pero lo cierto es que le apostamos a una lectura optimista que nos llevaba a pensar en la posibilidad de ayudar a transformar el punto de partida de un diálogo para la guerra en una negociación para la paz. La fórmula para buscar esa incidencia era sencilla: presionar por la presencia de la sociedad civil organizada en la acción por la paz y la no violencia y como protagonista de las negociaciones y no solo en la “mesa del lado”.

### **UNA NEGOCIACION FORZADA**

Hoy es frecuente que desde una u otra orilla se muestre que el contrario no tenía voluntad de paz. Podemos hacer una larga lista de citas de documentos de la guerrilla o de los voceros del gobierno o los militares con acusaciones sobre el incumplimiento de la contraparte o sobre su mala fe. Casi todas esas citas contienen un pedazo de la verdad del otro y un ocultamiento de las consideraciones estratégicas de quien hace el pliego de cargos.

Tal vez las revelaciones que ha hecho Fidel Castro en el libro sobre Colombia publicado en 2008 sea el más fiel relato de los cálculos políticos y militares con los cuales llegaron las FARC a la mesa de diálogo<sup>3</sup>. Después de los triunfos tácticos en Patascoy, Las Delicias, Mitu, etc, etc, el Estado Mayor de las FARC vislumbraba la posibilidad de controlar buena parte del sur y el oriente del país y de llevar su ofensiva militar a las ciudades; Marulanda y sus Generales veían factible dividir el país y crear un gobierno provisional que simbolizara un poder dual pero de alguna manera sentían que su punto débil era el déficit de aliados políticos que llenaran el vacío dejado por el aniquilamiento de los líderes de la Unión Patriótica y por su repliegue a una organización de estructuras predominantemente rurales. La Mesa de Diálogo en el Caguán se inscribió en esa estrategia general como un instrumento útil para promover en el país el programa de gobierno definido en las Conferencias de las FARC y tender puentes con sectores diversos que podrían ser neutralizados o tornarse simpatizantes de la propuesta revolucionaria<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> Fidel Castro, La Paz en Colombia, 2008. Cita en el libro: “Antes de esa ofensiva final, tienen previsto como alternativa dividir el país en dos, tomando el poder en dos o tres departamentos del Sur (Caquetá, Putumayo, Meta), mientras que en el Norte mantendrán cercadas y bloqueadas a las grandes ciudades. En ese caso buscarían una solución negociada sobre la base de los 10 puntos programáticos de las FARC y estarían en mayor ventaja de negociar; en caso de que esto no sea posible, continuarán la guerra hasta la toma del poder, que se ejercerá convirtiendo a los 80 frentes guerrilleros en la columna medular de un poder popular y que los mejores comandantes asuman la conducción de las fuerzas armadas”.

<sup>4</sup> FARC – EP, Octava Conferencia Nacional Comandante Jacobo Arenas, 1993, *“Plataforma de un gobierno de reconstrucción y reconciliación nacional”*, en donde enumeraron diez (10) objetivos de interés político - estratégico.

Esa versión que trae el libro de Fidel Castro sobre la perspectiva de doble poder y gobierno en el suroriente, se la escuche incrédulo en 1996 a mi medico bioenergético. Este hombre sensible, conversador incansable pero sin ninguna pretensión ni vinculación política, me contó de una conversación informal con un paciente que pertenecía a una misión militar de Estados Unidos en Colombia: “El plan de las FARC es dividir el país y luego si negociar con lo que quede en pie” le había dicho como secreto este personaje especializado en inteligencia contrainsurgente. Por supuesto que me pareció una locura de esas que se inventaba la CIA en centroamerica y en tantos lados para dibujar a sus enemigos, pero no dejó de rondarme la imagen en las cavilaciones cada vez que intentábamos descifrar los movimientos de esa guerrilla – EP en el tablero de la guerra.

En todo caso, las FARC tenían una lectura sobredimensionada de su realidad militar y despreciaban la profundidad del movimiento social contra la violencia y la guerra que se había desatado desde los tiempos de la Asamblea Constituyente. En las elecciones de 1997 llamaron al boicot y rechazaron el Mandato Ciudadano afirmando que se trataba de una maniobra mediática de la oligarquía. Pero lo cierto fue que el boicot les fracasó y no lograron alterar más del 10% de la votación y en cambio el Voto por la paz de 10 millones de colombianos se mostró como una fuerza activa en todos los ámbitos políticos. La respuesta de las FARC a los reclamos de cese de hostilidades incluyó endurecer las exigencias para aceptar llegar a la mesa de diálogos y exigieron cinco municipios desmilitarizados por el Estado como zona de seguridad bajo su exclusivo control<sup>5</sup>.

En el otro lado, desde la política tradicional, tampoco era mucho lo que se le apostaba a una solución negociada del conflicto armado. El gobierno de Samper estaba envuelto en la crisis del “proceso 8000” y las acusaciones por alianzas con el Cartel de Calí para la financiación de la campaña que lo llevó a la presidencia en 1994. Para sortear la crisis de gobernabilidad esa administración se aferró a los grandes grupos económicos haciéndoles toda suerte de concesiones y, aunque abrió ventanas a diálogos con el ELN y respaldo la iniciativa de Voto por la Paz en 1997, desde 1994 les dejó las manos libres a los militares para aplicar la política de guerra con todo y los aliados *non santos*. La debilidad del poder central fue el escenario propicio para la emergencia de los poderes regionales sustentados en la confluencia entre mafias, capos y políticos que se desamarraron de los aparatos nacionales. Así las cosas al escalamiento de la guerra y los triunfos de la guerrilla frente a las fuerzas armadas, se le opuso con vigor inimaginable el ascenso del paramilitarismo y del poder del narcotráfico y sus aliados.

En la primera vuelta para las elecciones presidenciales, en mayo de 1998, ganó Horacio Serpa con un discurso socialdemócrata de centro izquierda que incluyó propuestas de paz por la vía del diálogo, y Andrés Pastrana que lo siguió con pequeña diferencia, concentró su campaña en el tema social o económico en momentos críticos con una de las recesiones más fuertes de final de siglo. La

---

<sup>5</sup> Inicialmente las FARC propusieron cuatro municipios y en 1997 le agregaron el quinto. En octubre de 1998, mediante una resolución se estableció la zona de distensión en los municipios de Mesetas, La Uribe, La Macarena, Villahermosa y San Vicente del Caguán, en los departamentos de Caquetá y Meta. La zona tenía una fecha límite: el 7 de febrero de 1999 y se amplió luego en dos ocasiones hasta el 9 de enero de 2002.

paz no apareció en los discursos de Pastrana en la primera vuelta pero súbitamente se convirtió en su carta ganadora para la segunda.

Esta es una historia conocida, con la cita entre el candidato y Marulanda mediada por Alvaro Leyva y la promesa de aceptar la propuesta de zona despejada para iniciar conversaciones inmediatamente se posesionara. Pastrana se montó en la ola del Mandato por la Paz e incluso adoptó como suyo el lazo verde que habíamos lanzado como símbolo de la exigencia de diálogos y de cese del secuestro y la atrocidad<sup>6</sup>. Fue un giro vertiginoso en junio de 1998 como táctica para ganar las elecciones y no como parte de un programa meditado para buscar la solución política a la guerra. Ya con el triunfo, desde el gobierno fueron improvisando y armando el rompecabezas con una mezcla de ilusiones sobre la capacidad de maniobrar hacia un pacto aceptable por el “establecimiento” y diseños cada vez más precisos sobre la recomposición de las fuerzas armadas y de la estrategia militar.

El hecho es que Pastrana le “cogió la caña” a las FARC que habían colocado las apuestas muy alto y les aceptó el esquema de conversaciones desde la cita que como presidente sostuvo con Marulanda en 1998. Entre el 7 de agosto cuando se posesionó Pastrana y el 6 de mayo de 1999, pasando por el episodio de la silla vacía en San Vicente del Caguán y varios contratiempos propios del forcejeo inicial se fue configurando este modelo de diálogo que en un ensayo publicado en 2004 en la revista ACCORD de Londres, llamé “pacto de reformas para un nuevo Estado”<sup>7</sup>.

Los elementos centrales de ese esquema fueron: (1) la aceptación de que el dialogo y la negociación avanzaría en medio de la confrontación militar, exceptuando la zona desmilitarizada de encuentro delimitada en cinco municipios (47.000 km<sup>2</sup>); (2) la definición de la “Agenda Común por el cambio hacia una nueva Colombia”, que incluyó 12 temas y 48 subtemas, tales como el empleo, los derechos humanos, la política agraria -distribución de narco-tierra y sustitución de cultivos ilícitos-, los recursos naturales, la revisión del modelo de desarrollo económico y social, la reforma a la justicia y al Estado, los acuerdos sobre DIH, la redefinición de las Fuerzas armadas en tiempos de paz, y las relaciones internacionales e instrumentos democráticos para legitimar los acuerdos; (3) la incorporación de puntos mínimos de convergencia entre las partes, entre ellos el alcance de la solución política “hacia una nueva Colombia, por medio de transformaciones políticas, económicas y sociales que permitan consensos para la construcción de un Nuevo Estado fundamentado en la justicia social, conservando la unidad nacional” (La Machaca, mayo 6 de 1999); (4) la realización de “audiencias públicas”, transmitidas por televisión, en las que participaron más de 25.000 delegados y se presentaban las propuestas de los más distintos grupos y sectores sociales; igualmente se dio la participación de sectores de la sociedad civil en el Comité Temático, creado por la partes para contribuir con insumos a la mesa de negociación; (5) la suscripción, por parte de

---

<sup>6</sup> El lazo verde fue lanzado en una campaña por TV y otros medios masivos en un evento en la Quinta de Bolívar el 29 de julio de 1998 organizado por la Secretaria Técnica del Mandato por la Paz. El diseño fue propuesto por Salud Hernandez, entonces directora de la agencia de publicidad y comunicaciones Burson Marsteller a la Secretaria del Mandato. La agencia Samper- Socolof realizó los comerciales bajo la supervisión de Maria Victoria de Santos, Clara Ayerbe y Camilo González Posso y contó con la financiación de UNICEF.

<sup>7</sup> Camilo González et al, Ensayos de Paz, INDEPAZ Colección Punto de Encuentro, Bogota D.C. 2008

los partidos políticos y representantes de los gremios económicos, de un acuerdo de apoyo al proceso, y (6) la participación de representantes de gobiernos europeos y americanos, en calidad de observadores o facilitadores; así como de representantes del Secretario General de las Naciones Unidas y de varias agencias de la ONU, quienes acompañaron el proceso en asuntos puntuales de tipo humanitario o como mediadores<sup>8</sup>.

Mejor dicho, Pastrana les aceptó de todo para sentarlos a la mesa pero rápidamente se vio el desfase entre las agendas pactadas y las posibilidades políticas e intenciones militares de cada una de las partes. El nuevo gobierno contó con el apoyo de los grupos económicos más poderosos y del antisamperismo para enfrentar a Serpa, pero dejaron de acompañarlo rápidamente en los pactos de negociación que incluían en la agenda asuntos económicos y políticos “hacia una nueva Colombia”. Y para completar, mientras la Mesa de Diálogo y el Comité Temático se entretenían en intercambios académicos sobre la política de empleo, de seguridad social o los cultivos ilícitos, en la mesa paralela dirigida por Manuel Marulanda se trataban temas cruciales en la guerra simbolizados en la exigencia de desmonte de los paramilitares y en una propuesta de canje de prisioneros que se iba llenando de gente agregando a los policías y soldados retenidos que sumaban más de 300, la toma de rehenes entre los políticos regionales, parlamentarios, exgobernadores y diputados.

<b>TEMAS “AGENDA COMÚN POR LA PAZ”</b>	<b>TEMAS PLATAFORMA DE UN GOBIERNO DE RECONSTRUCCIÓN Y RECONCILIACIÓN NACIONAL<sup>9</sup></b>
1. Solución política al conflicto	1. Solución política al conflicto.
2. Derechos humanos	* Como contenido del tema sobre defensa nacional: Las FFAA serán respetuosas de los Derechos humanos...
3. Política agraria integral	2. Política agraria que democratice el crédito, la asistencia técnica y el mercado...
4. Explotación y conservación de recursos naturales	3. Explotación de los recursos naturales como el petróleo, el gas, el carbón, el oro, el níquel, las esmeraldas, etc., en beneficio del país y sus regiones...
5. Estructura económica y social	4. Desarrollo y modernización económica con justicia social. El Estado debe ser el principal propietario y administrador en los sectores estratégicos de la economía nacional. 5. El 50% del presupuesto nacional será invertido en bienestar social. El 10% del presupuesto nacional en investigación desarrollo.
6. Reformas a la justicia, la lucha contra la corrupción y el narcotráfico	6. Solución del fenómeno de producción, comercialización y consumo de narcóticos y alucinógenos, entendido como un grave problema social que no puede tratarse por la vía militar....
7. Reformas políticas para la ampliación de la democracia	7. Quienes mayores riquezas posean más altos impuestos aportarán para hacer efectiva la redistribución del ingreso.
8. Reformas del estado	8. Participación democrática nacional, regional y municipal en la toma de decisiones. Fortalecimiento de los instrumentos de fiscalización popular. La Procuraduría será rama independiente del poder público y elegido por voto

<sup>8</sup> En Ensayos de Paz, Negociaciones con las FARC 1982 – 2002, página 225. La Comisión Facilitadora para las negociaciones estuvo integrada por delegados de Canadá, Cuba, España, Francia, Italia, México, Noruega, Suecia, Suiza y Venezuela.

<sup>9</sup> Tomado textualmente del documento de las FARC “Plataforma de un gobierno...” op.cit.

	popular. El Parlamento será unicameral, La rama electoral será independiente. La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Nacional de la Judicatura serán elegidos por voto directo de todos los jueces y magistrados del país...
9. Acuerdos sobre DIH	
10. Fuerzas Militares	9. La doctrina militar y de defensa del Estado será bolivariana. Las FFAA serán garantes de nuestra soberanía nacional, respetuosas de los derechos humanos y tendrán tamaño y presupuesto acorde a un país sin guerra.
11. Relaciones internacionales	10. Relaciones internacionales con todos los países del mundo bajo el principio del respeto a la libre autodeterminación de los pueblos y del mutuo beneficio.
12. Formalización de acuerdos	

Fuente: Comparación Instituto de Estudios Geoestratégicos, Universidad Militar Nueva Granada, Edgar Piñuela Pinto, diciembre de 2001.

En los dos primeros años de “zona de distensión” y en medio de vueltas y revueltas, la palabra frase favorita era “ganar tiempo” y la agenda del día estaba atropellada por graves incidentes y pruebas de fuerza.

Las cronologías de estos años están llenas de hechos críticos desde el mismo 7 de enero de 1999 cuando se instaló la mesa de diálogos. Luego viene el asesinato de los 3 estadounidenses, la renuncia del Ministro de Defensa y 14 oficiales descontentos con el proceso, el forcejo sobre la verificación internacional en la zona, el secuestro de un avión en San Vicente, los interrogantes sobre el lanzamiento del Movimiento Bolivariano, la calificación de las FARC en Estados Unidos como grupo terrorista, las acusaciones sobre el uso de la zona para dirigir ataques, guardar secuestrados o ampliar cultivos de coca, las exigencia sobre disolución de paramilitares, las discusiones sobre el intercambio de “prisioneros”, los ultimatos de lado y lado y así hasta la ruptura final.

No existía claridad de cómo pasar del simple diálogo a la negociación, pero ante la expectativa nacional e internacional y los objetivos proclamados de buscar el camino para llegar al pacto, ninguna de las partes se atrevía a desmontarse del proceso. En ese ámbito de ambigüedades se movían las iniciativas de terceros dirigidas a producir cambios que mostraran posibilidades distintas a ganar tiempo y condiciones para las estrategias militares.

## ***UN ESQUEMA BILATERAL CON BARRAS POPULARES***

La idea de presionar un cambio de libreto chocó desde el principio con la rigidez del esquema de los diálogos y de las audiencias temáticas. Los negociadores no lograron pasar el primer punto de la agenda común y se vieron sacudidos por episodios de coyuntura o ecos de la confrontación en todo el territorio nacional, excluyendo solo la zona despejada de fuerza pública.

Más de 25000 personas llegaron a Los Pozos a las audiencias temáticas y desde las Mesas Ciudadanas se propuso cambiar la metodología para que se diera diálogo con los negociadores y no solo la presentación de propuestas sobre los temas escogidos. Algo se logró con el ejercicio de las Mesas Ciudadanas y se sostuvieron reuniones para entregar recomendaciones sobre 10 temas considerados en “Encuentros Nacionales para la agenda de paz”. Además se entregaron propuestas

en la audiencia internacional sobre alternativas de desarrollo frente a los cultivos de uso ilícito y al Plan Colombia que estaba en sus primeros pasos.

Pero todo ese esfuerzo de construcción de la agenda sustantiva no paso de las audiencias públicas, ni se tradujo en formulas de trabajo en la Mesa de Diálogo entre negociadores de las partes.

El expresidente Andrés Pastrana en sus memorias destaca como problema mayor de ese intento de negociación el manejo de la “zona de distensión” y el enfoque económico de la Agenda de Negociación.

En una de sus entrevistas de balance del fracaso de las conversaciones en El Caguán, Pastrana dice que “las FARC no estaban preparadas para la paz”, que estaban divididas entre el ala política encabezada por Cano y la militar de Jojoy y Joaquín Gómez. Pero en lo procedimental el expresidente le da vueltas al tratamiento de la agenda:

*“No debimos haber comenzado a discutir la agenda por el lado económico. Comenzamos por donde no debíamos, porque los temas de la agenda eran el político, el económico y social y las Farc se empeñaron en el económico y el económico es el que menos resultados inmediatos puede dar. Yo no puedo bajar el desempleo de un día para otro, no puedo aumentar la inversión social de un día para otro. Yo le dije a 'Marulanda' si nosotros hubiéramos empezado a hablar, por ejemplo, de reforma política posiblemente hubiéramos avanzado. Si nosotros hubiéramos firmado un primer acuerdo, yo creo que hubiera sido importante. Si nosotros hubiéramos iniciado de pronto por lo político hubiéramos avanzado y hubiera sido bueno para nosotros y para ellos, porque claro la gente lo que quería ver era resultados”.* (Entrevista de Arnulfo Peña, El Tiempo, 8 de mayo de 2008)

Lo cierto es que los negociadores del gobierno se propusieron cambiar la agenda pactada y llegar a una agenda sobre condiciones políticas hacia un cese de hostilidades y pactos de garantías en el escenario electoral como eje de la finalización del conflicto armado. Los ensayos que se hicieron con las audiencias sobre empleo y cultivos ilícitos solo mostraron la dificultad de alcanzar acuerdos que implicaban modificaciones reformistas en el modelo económico o en la cuestión de la tierra o de alternativas para el campesino.

Lo que dice el ex Presidente Andrés Pastrana muestra la situación sin salida que se construyó. Las FARC en ascenso pusieron como condición para los diálogos darle prioridad a los cambios para la Nueva Colombia y no se transaban por menos que su programa de gobierno democrático de reconstrucción y el reconocimiento a su poder que estimaban daba para ser el 50% de una Constituyente, tal como propuso Marulanda. Y aunque los cambios en debate no pasaban de un conjunto de reformas socialdemócratas y nacionalistas, las cúpulas del poder no estaban dispuestas a ceder en sus proyecciones económicas ni en la perspectiva de la globalización. En lo regional, más que discrepancias sobre modelos de desarrollo o de Estado, lo que se imponía era la disputa armada del territorio y de los recursos incluida por supuesto la tierra.

## ***TODO SE COMPLICÓ***

Desde el primer día de instalación de los diálogos quedó claro que se iniciaba un proceso difícil con pronóstico reservado. La imagen de la dificultad fue la “silla vacía” en la tribuna del evento que reunió el 7 de enero de 1999 a centenares de voceros de todos los sectores del poder y de la

sociedad colombiana y a los representantes de las FARC –EP. Ese día esperamos horas la llegada de Manuel Marulanda que tenía decidido no asistir supuestamente por razones de seguridad. Varios miles de guerrilleros acordonaban San Vicente del Caguán y vigilaban cada metro cercano a la Plaza donde esperaba hasta el embajador de los Estados Unidos, el Nobel García Márquez y el mismísimo Presidente de la República. De modo que los riesgos de un atentado eran menores y la decisión de no asistir se propuso bajar las expectativas sobre una paz cercana en esas conversaciones.

Ese año fue de tire y afloje en asuntos procedimentales y de corte militar, incluida la exigencia de unos de cese de los secuestros y ataques a objetivos civiles y la demanda de otros de desmantelamiento de los grupos paramilitares que mostraban un ascenso sin precedentes y estaban copando regiones enteras en el norte y nororiente del país.

La movilización ciudadana se hizo sentir en las 100 principales ciudades y llegó a la convocatoria de millones de personas en las marchas conocidas como NO MAS organizadas por la misma alianza que había llamado al Mandato Ciudadano por la Paz en 1997. Con esas movilizaciones se presionó a las partes a mantenerse en la mesa y a dar señales de interés por el trámite de las agendas en especial la de respeto a la población civil y a las normas del DIH. Ese movimiento del NO MAS lo iniciamos con el lema No mas secuestros, no mas desaparición forzada: negocien Ya; pero fue evolucionando con dos corrientes a su interior, una dirigida por País Libre se enfocó al tema de la condena al secuestro y otra, con influencia sindical y de izquierda, dirigida hacia la solución negociada con agenda de reformas.

Pero a la mesa de negociaciones en el Caguán llegaba solo el eco de las movilizaciones, disminuido por los episodios de guerra cada vez más frecuentes. Las masacres señalaron el avance de los paramilitares en Antioquia, Meta, Santander, Casanare, Putumayo, Bolívar y Sucre. Las muertes asociadas al conflicto armado pasaron de 4.880 en 1997 a 10.973 en 2001<sup>10</sup>. Los desaparecidos entre 1998 y 2001 superaron los 3.300 con las cifras anuales más altas de los últimos 20 años. El acumulado de personas obligadas a desplazarse por la violencia que era 1.247.510 en 1997 llegó a 2.503.000 en el 2001 como resultado de la escalada del conflicto y su degradación. Las mayores cifras de secuestros de los últimos 20 años corresponden a ese periodo. Según el Ministerio de Defensa los paramilitares triplicaron el número de sus efectivos armados en estructuras permanentes, superando los 9.000. Ahora se sabe que ese crecimiento fue mayor y que llegaron a cerca de 20.000 miembros armados. Y entre 1998 y 2001 las FARC y el ELN duplicaron sus efectivos llegando a cerca de 25.000 combatientes<sup>11</sup>.

Supuestamente se estaba dialogando para la paz pero mientras las noticias de El Caguán eran sobre pretextos, trabas y desacuerdos, las noticias de la guerra en el resto del país eran sobre su crecimiento geométrico. Cada prorroga de la zona despejada por la fuerza pública significó un balance más exigente con saldo rojo. El gobierno fue perdiendo impulso en la búsqueda de

---

<sup>10</sup> Cálculos con cifras del CINEP 1997 – 2001.

<sup>11</sup> Diego Otero Prada, Las cifras del conflicto colombiano, INDEPAZ, 2da edición, enero de 2007.

acomodos a la agenda y al cronograma y fue ganando terreno en la reingeniería de las Fuerzas Armadas y en el apoyo militar de Estados Unidos a la guerra antidrogas y su mutación en guerra antiterrorista. “Estamos listos para la paz pero también, si no la aceptan, estamos preparados para la guerra” se atrevió a decir Pastrana haciendo el balance de los cambios en las fuerzas armadas como resultado de la profesionalización, la incorporación de alta tecnología, los cambios en la organización de comando, la inclusión del Comando Sur en las instancias de deliberación y decisión en cúpula y las regulaciones como las introducidas con la *Ley de seguridad, defensa y estatuto antiterrorista*.

El protagonismo del presidente Andrés Pastrana se fue agotando; fue central en la dinámica inicial del proceso, no sólo por los contactos previos a asumir la presidencia que dieron origen al proceso de diálogo y negociación, sino por el papel que desempeñó en los momentos de crisis del mismo. Fue el caso a principios de Mayo de 1.999, cuando viaja a la zona del despeje para encontrarse con Manuel Marulanda y acordar con él el inicio formal de negociaciones a partir de una agenda común. Igualmente en Febrero 8 y 9 del 2.001, cuando vuelve a encontrarse con Marulanda para tratar de descongelar los diálogos. En esta ocasión se firma el Acuerdo de los Pozos que estableció algunos consensos en cómo avanzar en el proceso, particularmente creando una comisión de personalidades para que haga recomendaciones a la mesa de negociación. Además se concretó un acuerdo humanitario y se promovió una mayor participación de la comunidad internacional. En Junio 2 se firma el acuerdo humanitario para intercambiar 42 militares enfermos retenidos por la guerrilla por 15 guerrilleros en prisión igualmente enfermos. Posteriormente las FARC unilateralmente pone en libertad 242 soldados y policías retenidos<sup>12</sup>.

Pero el oxígeno que se le inyectó al proceso en el primer semestre de 2001 fue de corto aliento y terminó agotándose después del atentado del 11 de septiembre en Estados Unidos y del viraje a “la guerra mundial antiterrorista”. Las tensiones que se presentaron rebelaron la dificultad de mantener el apoyo de los grandes empresarios y del poder tradicional a un modelo de negociación que suponía compromisos de cambios para un “nuevo Estado” antes de tratar la cuestión de la desmovilización y el desarme, y aún antes de pactar un cese de hostilidades indefinido y definitivo. A lo anterior, se agregó el rechazo de algunos sectores de la sociedad a la existencia de una amplia zona desmilitarizada, que si bien era un territorio neutral para el dialogo, también era un territorio estratégico para las FARC - EP. A ello se agregaba, la percepción de un dialogo prolongado en medio de la crueldad de la guerra, sin que se observaran resultados alentadores. El desfase entre el ritmo de las conversaciones y las expectativas de una sociedad movilizada se tradujeron en una presión creciente para el avance de acuerdos humanitarios y el cese de hostilidades. El Gobierno de Pastrana perdió apoyo y el proceso malgastó su credibilidad entre la población al ritmo de las acciones militares y de los actos violentos contra la población civil.

## ***LOS NOTABLES LLEGARON TARDE***

Cuando la Mesa de Diálogo acordó nombrar una comisión de personalidades para que presentará formulas para redefinir el proceso, ya era demasiado tarde y las maquinas de la guerra habían tomado la mayor fuerza.

---

<sup>12</sup> Negociaciones de paz con las FARC, 1984 – 2002, op cit.

En el círculo de gobierno de Pastrana fueron ganando fuerza los que no le veían salida a los diálogos y estaban por prepararse para retomar la ofensiva militar en una alianza privilegiada con los Estados Unidos. La punta de lanza de la recomposición estratégica fue la confluencia con los halcones del Departamento de Estado y el Pentágono que le dio forma al Plan Colombia como pieza clave de la guerra contra las drogas. Para vencer la resistencia inicial de sectores demócratas le fijaron límites al número de efectivos militares estadounidenses destacados al combate al narcotráfico y le dieron destinación exclusiva a la dotación de inteligencia y logística; pero para saltar de la guerra antidrogas a la antisubversiva acuñaron la caracterización de guerra contra la narcoguerrilla y después del 11 de septiembre pasaron a la “guerra antiterrorista” que metió a los Estados Unidos en el centro del comando de la guerra y subsumió el conflicto interno armado en Colombia en las lógicas e interés de seguridad militar de la primera potencia del mundo.

Los artífices del Plan Colombia elaboraron la teoría de golpear la oferta y justificaron la estrategia de fumigaciones masivas supuestamente dirigidas a la erradicación de cultivos y disminución de la oferta y en lo fundamental para quitarle los recursos a los grupos armados ilegales. “Cortarle la yugular a la guerra irregular” dijo por entonces el señor Koulter desde su poltrona del Banco Mundial.

La alianza militar con la administración Bush marcó el inicio del fin del proceso en El Caguán desde mediados de 2001. Y las FARC también comenzaron los pasos para la ruptura sintiendo que los réditos de la zona de distensión habían llegado a cero y que perdían en iniciativa política y avanzaban los paramilitares ganando terreno no solo en la costa Caribe sino también en otras regiones clave en el escenario de las confrontaciones.

En ese contexto, después de otra visita de Pastrana a la zona despejada, se intentó la fórmula de nombrar la Comisión de Personalidades, con 2 miembros propuestos por cada parte, para que presentara una propuesta de redefinición de los diálogos y de salvación de las negociaciones. Estas personalidades (Vladimiro Naranjo, Ana M Gomez que renunció, Carlos Lozano y Alberto Pinzón) entregaron sus recomendaciones el 27 de septiembre de 2001 con propuestas que respondían con una dosis realismo a algunas inquietudes del gobierno y a las aspiraciones de las FARC; pero la suerte estaba echada y no se dieron las condiciones para tramitarlas en la Mesa bilateral.

El documento de los “notables” parte de un balance del proceso y reconoce la necesidad de cambiar el esquema comenzando por establecer un periodo de seis meses de tregua bilateral durante el cual se analizaría la agenda, no para llegar a pactos de contenido sino para decantarla en la perspectiva de remitir su tratamiento a una Constituyente.

El replanteamiento de la negociación en medio de las balas es contundente: “La experiencia histórica, tanto en Colombia como en el mundo, demuestra que el esquema de la negociación bajo el fuego no produce resultados satisfactorios, al menos en el corto y mediano plazo, en el objetivo de lograr la paz. Porque, entre otras cosas, supone mantener la aspiración de cada una de las partes en conflicto de imponerse por la fuerza de las armas a la parte contraria hasta derrotarla militarmente, con todo lo que ello implica en pérdida de

vidas humanas, en destrucción material, en gasto económico y en ruina física y moral para millones de personas”.

Se pronuncia por algunas formulas de vinculación de otros actores en la mesa de negociación: (numeral 3) “...que se invite a sus deliberaciones, además de las autoridades públicas, civiles o militares, pertinentes, a voceros o representantes de los diferentes estamentos o sectores de la sociedad colombiana que puedan contribuir con sus opiniones y experiencia a la determinación de los temas concretos a incluir en el temario, a fin de que se obtengan los avances esperados por la sociedad colombiana”.

Deja abierta la puerta a otras opciones de trámite de los acuerdos como la acción legislativa y la convocatoria a un referendo, dándole en todo caso prioridad a una Constituyente que con sus acuerdos ponga fin a las confrontaciones y se integre con participación de todos los sectores y un cupo para las guerrillas comprometidas a acoger sus resultados.

Este documento tiene posiciones importantes de rechazo al narcotráfico y de búsqueda de cooperación internacional para encontrar alternativas y también la exigencia de compromisos humanitarios que incluyen respuestas al flagelo del secuestro y a otras vulneraciones de los derechos humanos y del derecho humanitario. El combate al paramilitarismo merece un capítulo especial.

Larga sería también la lista de ausencias, comenzando por la clarificación del tema de las armas, pero en lo fundamental se trata de un conjunto de recomendaciones que de haber sido acogidas hubieran cambiado la historia de ese proceso con una oportunidad real a la solución negociada para la paz.

Más tardía que la gestión de los “notables” fue la intervención de las Naciones Unidas y de la comunidad internacional que intentó a última hora un nuevo plazo para la zona de distensión. Y menos incidencia podía tener la presión ciudadana que a esas alturas estaba desencantada de las conversaciones y líos en el Caguán. Símbolo de esa soledad de la paz fueron las vigiliadas montadas frente al edificio donde tenía sede la delegación del Secretario General en Bogotá. Allí estuvimos esperando las últimas noticias los más persistentes entre los persistentes sin darnos cuenta de que se había cerrado un ciclo de intentos de solución negociada entre las guerrillas y el gobierno y se abría en realidad una década de guerras sin cuartel. No solo habían fracasado los “notables” y los mediadores, pues también fracasó el intento desde la sociedad civil y el movimiento por la paz de cambiar la ruta de un proceso que inicio sin que ninguno de los protagonistas le apostara al éxito de la negociación más que a sus propias ventajas.

Bogotá D.C. julio de 2009

